



AUTO INTERLOCUTORIO

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTE	Tathiana Velásquez Rendón
DEMANDADOS	ESU y el Municipio de Medellín
RADICADO	05-001-31-05- 009-2014-01290
TEMA	Apelación de las costas procesales
DECISIÓN	Confirma auto recurrido

El dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, dentro del proceso ordinario, promovido por **TATHIANA VELÁSQUEZ RENDÓN** contra la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA -ESU-** y el **MUNICIPIO DE MEDELLÍN**, procede a resolver lo pertinente.

A continuación, se toma la decisión correspondiente mediante providencia interlocutoria, según acta de discusión de proyectos **N° 217**, aprobada por los integrantes de la Sala.

Llegó el auto a este Tribunal para conocer del recurso de apelación formulado por el apoderado del **MUNICIPIO DE MEDELLÍN**, contra la decisión tomada por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, el 14 de junio de 2022, mediante el cual liquidó las costas procesales por un valor total de **\$46'776.498** a cargo de las demandadas, discriminado en **\$23'388.249** para cada una de ella.

- **APELACIÓN:**

Para la sustentación del recurso el apoderado del municipio de Medellín considera que, el acuerdo 1887 de 2003, al establecer los parámetros para la fijación de las costas y agencias en derecho, instituye que estas no solamente se causan por la naturaleza, calidad y duración de la gestión, criterio que es relevante en estos procesos, pues se trata de actuaciones con prácticas de pruebas, entre otros.

Que las costas fijadas en primera instancia no guardan relación con la condena actual y por tanto se debe realizar una nueva liquidación, teniéndose en cuenta

que las agencias en derecho no son otra cosa que la compensación por los gasto de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora, y debe ser entendida como una utilidad razonable y proporcionada, considerando tanto la naturaleza como la finalidad de la actuación desplegada.

Que las agencias en derecho fijadas se encuentran fueran de los parámetros establecidos por el acuerdo en mención, ya que son bastante altas, si se compara la naturaleza del proceso y la actuación desplegada en el mismo.

Y, que acogiendo el principio de la buena fe, la actuación y posición asumida por el ente municipal, estuvo acorde con la lealtad que debe observar todo sujeto procesal, en oposición al comportamiento temerario; por lo que se acude a este principio para que se observe que el ente municipal no solo esta dispuesto a acoger la decisión sino legalmente obligado a atenderla, ya que actuó de forma diligente, por tanto, no es acorde con ello, que sea condenada a asumir una condena en costas que supere el salario mínimo legal vigente.

- **ALEGATOS:**

✓ Demandante:

La parte actora, manifestó en sus alegatos que en el presente caso se está dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 366 del Código General del Proceso. Que se realizó un excelentemente trabajado por parte del apoderado. Que el proceso duró 8 años largos. Que el apoderado interpuso los recursos de ley y alegatos correspondientes. Que fue un proceso de lata complejidad. Que debe liquidar según las voces de lo ordenado por el acuerdo 1887 de 2003 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en su numeral 2.1.1 que trata del Proceso Laboral Ordinario de Doble Instancia. Y que las agencias en derecho del presente caso debieron haber oscilado entre un 20% y un 25%, no obstante, el juez liquidó por concepto de costas al 15%. Por lo anterior se debe confirmar el auto recurrido.

✓ MUNICIPIO DE MEDELLÍN:

Señaló en sus alegatos que no se está dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 366 del Código General del Proceso en forma equitativa tal como lo ordena el acuerdo 1887 de junio 26 de 2003, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, al establecer los parámetros para la fijación de las costas y agencias en derecho, ya que todos

los apoderados judiciales que representaron tanto a la parte actora, como a las partes demandadas fueron bastante diligentes en el transcurso del proceso, siendo la condena bastante alta como para venir a hacer más gravosa la situación para estas con la condena en costas, por lo que se debe realizar una nueva liquidación, teniendo en cuenta que las agencias en derecho no son otra cosa que la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora, no obstante, la utilidad de gastos debe ser entendida como una utilidad razonable y proporcionada, teniendo en consideración tanto la naturaleza del proceso como la finalidad de la actuación desplegada. Y que la actuación y posición asumida por el Ente Municipal demandado, estuvo acorde con la lealtad que debe observar todo sujeto procesal, en oposición al comportamiento temerario y siempre actuó bajo el principio de la buena fe.

Al respecto el Tribunal hace las siguientes:

CONSIDERACIONES

Para resolver la inconformidad presentada, lo primero que debe señalarse, es que las **expensas judiciales** – entendidas éstas como los gastos necesarios para el trámite del juicio - (honorarios de peritos, copias, diligencias que deban llevarse a cabo por fuera del Despacho Judicial) y las **agencias en derecho** – dinero que se adeuda por los gastos en que incurrió la parte triunfante de un proceso con la contratación del profesional que defendió sus intereses – (honorarios), hacen parte integrante de las **costas procesales**, lo cual constituyen en erogaciones que debe cubrir la parte vencida en el proceso.

Igualmente, las agencias en derecho *“representan una contraprestación por los gastos en que la parte incurrió para ejercer la defensa judicial de sus intereses”* y es *“el juez quien, de manera discrecional, fija la condena por este concepto con base en los criterios establecidos en el artículo 393 – 3 – del Código de Procedimiento Civil... Dicha condena no corresponde, necesariamente, a los honorarios efectivamente pagados por la parte vencedora a su apoderado...”*¹ (Negrilla de la Sala).

Por su parte, el artículo 366 -4- del Código General del Proceso, indica que para la fijación de agencias en derecho se consultará las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Determina, igualmente, que si *“...éstas*

¹ Sentencia de la Corte Constitucional C-539 del 28 de julio de 1999

solamente establecen un mínimo, o éste o un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de esas tarifas...”

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, como correctamente lo manifiesta el apoderado de la parte accionada, se deben fijar las costas procesales con los parámetros del decreto 1887 de 2003, y por tanto se debe enmarcar en las pautas que trae la “tarifa de honorarios del Consejo Superior de la Judicatura”, que reza, en su artículo 6° numeral 2.1.1:

(...)

“Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.

(...)

El **caso objeto de estudio**, se trató de un proceso ordinario laboral, en el que el juzgado noveno laboral del circuito de Medellín, a través de sentencia proferida el 6 de septiembre de 2016, resolvió declarar la existencia de un vínculo contractual regido por un contrato de trabajo entre el 20 de diciembre de 2010 y el 30 de abril de 2011, condenado a la ESU a pagar el auxilio de cesantía por valor de **\$1'447.875**, vacaciones compensadas en dinero **\$643.500**, prima de navidad **\$1'287.000**, devolución de la proporción en aportes por salud **\$492.089**, devolución de la proporción en aportes en pensión **\$471.520**, indemnización moratoria por valor de **\$118.800** diarios a partir del 1° de agosto de 2011 y hasta la fecha del pago, e indemnización por despido sin justa causa **\$5'940.000**, debiendo el municipio de Medellín responder solidariamente con la ESU por el pago de los derechos prestacionales e indemnizatorios.

Esta Sala de Decisión en segunda instancia, modificó la sentencia y decidió condenar a la ESU y al MUNICIPIO DE MEDELLÍN solidariamente, a reconocer y pagar a la demandante, por concepto de intereses a la cesantía la suma de **\$22.186** y por prima de vacaciones **\$262.350**; y por otro lado, revocó la decisión de primar instancia en lo que tiene que ver con la indemnización moratoria contemplada en el decreto 797 de 1949, para en su lugar absolver a las demandadas por tal concepto, no obstante, prosperó la indexación de las condenas.

Interpuesto el recurso extraordinario de casación, la Corte Suprema de Justicia, casó parcialmente la sentencia de segunda instancia, y en sede de instancia condenó a la ESU a cancelar por el concepto de indemnización moratoria la suma de **\$301.276.800**.

Ahora, no pasa por alto la Sala, que las condenas impuestas a las accionadas fueron obligaciones no periódica, siendo liquidados en su totalidad todos los conceptos, así mismo, tampoco se puede omitir que el decreto 1887 de 2003 establece criterios de carácter **cualitativo** y **cuantitativo** para que el juzgador fije las agencias en derecho, más no se deduce de la interpretación de tales disposiciones que éstas, de manera automática, impongan el valor de dicha erogación, pues simplemente orientan al juez para que, en uso de su discrecionalidad, fije un monto que considere prudente y proporcional con el valor de las condenas por él reconocidas, el tipo de proceso, y la duración y calidad de la gestión que realizó el apoderado en el transcurso del proceso, teniendo como límite el tope máximo fijado por la ley, pero sin que ello signifique que de manera necesaria, el fallador esté condicionado a fijar como agencias el máximo legal.

Se tiene pues, que el juez de la primera instancia fijó las agencias en derecho en una primera oportunidad por la suma de \$1'378.908, las mismas que fueron modificadas una vez regresó de la Corte Suprema de Justicia por valor de **\$46'776.498** a cargo de las demandadas, dividido en partes iguales para cada una, lo cual corresponde a un porcentaje del **15%** de las condenas impuestas

En el presente caso, es importante señalar que la gestión realizada por el apoderado de la accionante en el proceso de la referencia fue diligente, donde se aportaron las pruebas necesarias para resolver el asunto, asistiendo a las respectivas audiencias, y teniendo en cuenta que el proceso tuvo una duración de 7 años y 9 meses, entre la interposición de la demanda y la liquidación de costas, por lo que considera la Sala pertinente **CONFIRMAR** el valor de las agencias en derecho impuestas en la primera instancia, ya que estas se ajusta a derecho, conforme a la complejidad, duración y análisis de la prueba.

En conclusión y sin necesidad de más consideraciones al respecto, se **CONFIRMARÁ** el auto recurrido por las razones que se han dejado consignadas.

Con los argumentos anteriores y atendiendo al principio de consonancia de que trata el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad

Social, modificado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas.

Sin costas procesales en el recurso.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Se **CONFIRMA** el auto recurrido que se revisa por vía de apelación, de fecha y procedencia conocidas.

SEGUNDO: Sin costas procesales en el recurso.

Se notifica lo resuelto por **ESTADOS** y se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN - SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 146 del 19 de agosto de 2022

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>